



H. CONGRESO DEL
ESTADO DE YUCATÁN
LXII Legislatura 2018-2021



H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

La suscrita, Diputada Kathia María Bolio Pinelo integrante de la Fracción Legislativa del Partido Acción Nacional de esta Sexagésima Segunda Legislatura, con fundamento en los artículos 30 fracción V y 35 fracción I, de la Constitución Política; artículos 16 y 22 Fracción VI de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo, así como de los artículos 68, 82 fracción IV del Reglamento del Poder Legislativo, todos del Estado de Yucatán, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la presente: **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA UN ARTÍCULO DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE YUCATÁN EN MATERIA DE DELITOS GRAVES**, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Una sociedad se debe regir y caracterizar por sus actos de legalidad, honestidad y transparencia, sin importar la profesión, el oficio o el cargo que se desempeñe, debiendo prevalecer en todo momento en el accionar del ciudadano una conducta de rectitud y de lealtad.

Los actos de corrupción van acompañados de muchos hechos de impunidad que ocasionan a su vez graves consecuencias para la sociedad, dando pie a violaciones de los derechos humanos, desigualdad, injusticia, afectaciones en la calidad de vida de la población principalmente en grupos en situación de vulnerabilidad y al mismo tiempo genera desconfianza en la ciudadanía hacia las instituciones públicas y hacia las diversas autoridades municipales, estatales y federales, sin embargo, esta situación no debe ser motivo para catalogar como inoperantes a dichas instituciones y tampoco para tachar de forma generalizada las acciones de todos los que se desempeñan como servidores públicos, ya que así como existen malos servidores públicos, también existen buenos que realmente hacen su trabajo con esmero, formalidad y compromiso.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señaló que hasta el año 2016, México tenía a 4.2 millones de servidores públicos trabajando en las

diferentes instituciones de las administraciones públicas del país, lo que representa una tasa nacional de 344 servidores públicos por cada diez mil habitantes, trabajando el 39% en el ámbito federal y el 61% en las administraciones estatales; En estados como Tabasco, Guerrero, Colima, Nayarit, Baja California Sur, Zacatecas, Yucatán, Durango, Hidalgo y Ciudad de México se tenía en ese mismo año más de 300 servidores por cada diez mil habitantes.

En 2017 más de 60% de la población manifestó confiar únicamente en las instituciones públicas de educación, salud, el ejército y la marina; y alrededor de 2 de cada 10 personas expresó tener confianza en los partidos políticos o en los diputados y senadores.

De acuerdo con el Índice Global de Impunidad 2015, México se encuentra dentro de los cinco países con niveles más altos de impunidad, en donde el 95 por ciento de los delitos de corrupción cometidos por particulares y servidores públicos principalmente, quedan impunes.

La confianza es muy difícil de ganar y muy fácil de perder, y esa es la situación actual de una gran cantidad de servidores públicos en el país, en los que la mayoría de la población ya no confía, ya que en la actualidad la gente liga más el concepto de servidor público con la palabra corrupción e ineficiencia, que con la palabra legal y solución, por lo que la imagen de este cargo se ha desgastado enormemente con el tiempo, y hay que decirlo con toda sinceridad, desgaste que muchas veces es justificado, ya que algunas de las personas que lo han desempeñado se han aprovechado del cargo de forma arbitraria e ilegal, apoderándose incluso de lo ajeno cayendo así en un enriquecimiento ilícito derivado del dinero de todos los mexicanos, que aportamos con nuestros impuestos esperando que sea administrado y utilizado correctamente para el bien de todos, creando con él mejores oportunidades de desarrollo y crecimiento en los diferentes ámbitos, como el educativo, el cultural, el deportivo, el laboral, entre otros.

Las Naciones Unidas establecieron el 23 de junio como el Día para la Administración Pública con el objetivo de revitalizar la administración pública creando una cultura de renovación, colaboración y respuesta a las necesidades de los ciudadanos, poniendo en relieve su contribución al proceso de desarrollo.

A pesar de la gravedad del delito de enriquecimiento ilícito cometido por servidores públicos, no se encuentra en la actualidad en la lista de los delitos graves establecidos con el Código Penal del Estado de Yucatán, por lo que quien cometa este delito hoy en día en el estado tendrá el derecho de llevar su proceso en libertad provisional bajo caución, a que hace referencia el Código de Procedimientos en Materia Penal.

El Código Penal del Estado de Yucatán establece lo siguiente con respecto al delito de enriquecimiento ilícito:

Artículo 265.- Se sancionará a quien con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, haya incurrido en enriquecimiento ilícito. Existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no pudiere acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño. Incurrirá en responsabilidad penal, asimismo, quien haga figurar como suyos bienes que el servidor público adquiriera o haya adquirido en contravención de lo dispuesto en la misma ley, a sabiendas de esta circunstancia.

Para efectos del párrafo anterior, se computarán entre los bienes que adquieran los servidores públicos o con respecto de los cuales se conduzcan como dueños, los que reciban o de los que dispongan su cónyuge y sus dependientes económicos directos, salvo que el servidor público acredite que estos los obtuvieron por sí mismos.

No será enriquecimiento ilícito en caso de que el aumento del patrimonio sea producto de una conducta que encuadre en otra hipótesis de este título. En este caso se aplicará la hipótesis y la sanción correspondiente, sin que dé lugar al concurso de delitos.

Artículo 266.- Al que cometa el delito de enriquecimiento ilícito se le impondrán, además del decomiso en beneficio del estado de aquellos bienes cuya procedencia no se logre acreditar, las siguientes sanciones:

I.- Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito no exceda del equivalente de cinco mil unidades de medida y actualización se impondrán de tres meses a dos años de prisión y de treinta a cien días-multa, o

II.- Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito exceda del equivalente de cinco mil unidades de medida y actualización se impondrán de dos años a catorce años de prisión y multa de cien a ciento cincuenta días-multa.

Es en ese sentido que propongo reformar el artículo 13 del Código Penal del Estado, con la finalidad de que se contemple como delito grave sin libertad provisional bajo caución el delito de enriquecimiento ilícito en Yucatán.

El servicio público es una gran responsabilidad para servir a la población, y se debe ejercer a cabalidad con principios y valores, buscando siempre el bien común de toda la sociedad y no el interés personal.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa de:

**DECRETO POR EL QUE SE REFORMA UN ARTÍCULO DEL CÓDIGO
PENAL DEL ESTADO DE YUCATÁN EN MATERIA DE DELITOS
GRAVES.**

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se reforma el artículo 13 del Código Penal del Estado de Yucatán, para quedar como sigue:

| Texto vigente | Texto a reformar |
|---|--|
| <p>Artículo 13.- Para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, se califican como delitos graves los siguientes: contra el orden constitucional, previsto por el artículo 137; rebelión, previsto por el artículo 139; evasión de presos, previsto por el artículo 153; corrupción de menores e incapaces, previsto por el artículo 208; trata de menores, previsto por el artículo 210; pornografía infantil, previsto por el artículo 211; incesto, previsto por el artículo 227; allanamiento de morada con violencia, previsto en el segundo párrafo del artículo 236; asalto, previsto por los artículos 237, 239 y 240; privación ilegal de la libertad, previsto por los artículos 241 fracción I y 242; tortura, previsto en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Degradantes; falsificación de documentos, previsto en el artículo 284-bis; violación, previsto por el artículo 313; violación equiparada, definido por el artículo 315; robo calificado previsto en la fracción I del artículo 335, independientemente del importe de lo robado; así como en las demás fracciones del mismo artículo cuando el importe sea el establecido en las fracciones III o IV del numeral 333; robo con violencia previsto en el artículo 330, en relación con el 336; robo relacionado con vehículo automotor, previsto en el artículo 338, fracciones I, II, IV y VI; robo de ganado mayor, previsto por el artículo 339, a partir de dos piezas; robo de ganado menor, previsto por el artículo</p> | <p>Artículo 13.- Para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, se califican como delitos graves los siguientes: contra el orden constitucional, previsto por el artículo 137; rebelión, previsto por el artículo 139; evasión de presos, previsto por el artículo 153; corrupción de menores e incapaces, previsto por el artículo 208; trata de menores, previsto por el artículo 210; pornografía infantil, previsto por el artículo 211; incesto, previsto por el artículo 227; allanamiento de morada con violencia, previsto en el segundo párrafo del artículo 236; asalto, previsto por los artículos 237, 239 y 240; privación ilegal de la libertad, previsto por los artículos 241 fracción I y 242; tortura, previsto en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Degradantes; enriquecimiento ilícito, previsto en la fracción II del artículo 266; falsificación de documentos, previsto en el artículo 284-bis; violación, previsto por el artículo 313; violación equiparada, definido por el artículo 315; robo calificado previsto en la fracción I del artículo 335, independientemente del importe de lo robado; así como en las demás fracciones del mismo artículo cuando el importe sea el establecido en las fracciones III o IV del numeral 333; robo con violencia previsto en el artículo 330, en relación con el 336; robo relacionado con vehículo automotor, previsto en el artículo 338, fracciones I, II, IV y VI; robo de ganado mayor, previsto por</p> |

| | |
|--|--|
| <p>340, cuando el importe de lo robado sea el establecido en la fracción IV del artículo 333; las conductas previstas en el artículo 347; daño en propiedad ajena por incendio o explosión previsto por los artículos 348 y 349; lesiones, previsto por los artículos 360, 361, 362 y 363; homicidio doloso, previsto por el artículo 368, en relación con el 372, 378, 384 y 385; homicidio en razón del parentesco o relación, previsto en el artículo 394, y feminicidio, previsto en el artículo 394 Quinquies.</p> <p>A quienes se atribuya haber cometido algún delito grave de los señalados en el párrafo anterior, no tendrán derecho a la libertad provisional bajo caución, a que hace referencia el Código de Procedimientos en Materia Penal.</p> | <p>el artículo 339, a partir de dos piezas; robo de ganado menor, previsto por el artículo 340, cuando el importe de lo robado sea el establecido en la fracción IV del artículo 333; las conductas previstas en el artículo 347; daño en propiedad ajena por incendio o explosión previsto por los artículos 348 y 349; lesiones, previsto por los artículos 360, 361, 362 y 363; homicidio doloso, previsto por el artículo 368, en relación con el 372, 378, 384 y 385; homicidio en razón del parentesco o relación, previsto en el artículo 394, y feminicidio, previsto en el artículo 394 Quinquies.</p> <p>A quienes se atribuya haber cometido algún delito grave de los señalados en el párrafo anterior, no tendrán derecho a la libertad provisional bajo caución, a que hace referencia el Código de Procedimientos en Materia Penal.</p> |
| | |

TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial del Estado de Yucatán.

Dado en la sede del Recinto del Poder Legislativo, en la ciudad de Mérida, Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, a los tres días del mes de julio de 2019.



KATHIA MARÍA BOLIO PINELO
DIPUTADA